

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
NÚMERO: \*\*\*\*\*

ACTOR: \*\*\*\*\* , albacea en la  
sucesión a bienes a nombre de \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Y/O \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (de cujus).

AUTORIDAD DEMANDADA: 1) SECRETARÍA  
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS  
MARÍA, AGUASCALIENTES e 2) INSTITUTO  
CATASTRAL DEL ESTADO DE  
AGUASCALIENTES, ahora SECRETARÍA DE  
GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Aguascalientes, diecisiete de enero de  
dos mil veinte.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de  
nulidad número \*\*\*\*\*.

#### RESULTANDO:

I.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de  
Partes del Poder Judicial del Estado, el veinte de marzo de dos mil  
diecinueve turnado a esta Sala el día siguiente hábil, \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , albacea en la sucesión a bienes a nombre de  
\*\*\*\*\* Y/O \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (de cujus), demandó de las autoridades al rubro  
indicadas, la nulidad del acto administrativo que precisó en los  
siguientes términos:

#### “ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS”

A) La ilegalidad del pago del impuesto a la propiedad raíz por el ejercicio  
fiscal 2019 a cargo de la parte actora, determinado (resolución determinante) y liquidado  
por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Jesús María en la cuenta catastral  
número \*\*\*\*\* , por la que se pagó el monto total de \$300,702.37 el  
día 01 de marzo de 2019.

B) Así también, se impugna la ilegal determinación del avalúo catastral  
realizado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, ya que no se conoce el  
mismo y nunca ha sido notificado. Se impugna el desconocimiento de ambos actos  
administrativos porque, tal y como se ordena en las leyes fiscales aplicables, las dos

autoridades demandadas son o intervienen en el procedimiento para la determinación y liquidación del crédito.

C) La inexistencia de las Tablas de Valores Unitarios utilizadas para el cálculo y determinación de los créditos fiscales impugnados; así también niego que las mismas hayan sido aprobadas por las autoridades obligadas a emitirlas y bajo el procedimiento que las normas aplicables ordenan.

D) La inexistencia de la notificación a la que legalmente estaba obligada la autoridad municipal a realizar previo pago del impuesto.”

II.- Por acuerdo de **veintiséis de marzo de dos mil diecinueve**, se admitió la demanda interpuesta por la parte actora, teniéndose por admitidas las pruebas ofrecidas por su parte en términos del propio acuerdo y ordenando el emplazamiento a las autoridades demandadas.

III.- Mediante auto de fecha **veintiocho de mayo de dos mil diecinueve**, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, se admitieron las pruebas ofrecidas por su parte y se corrió traslado al actor para que formulara ampliación de demanda.

IV.- El **seis de junio de dos mil diecinueve**, se decretó interrupción del procedimiento, por la acreditación de la existencia del representante legal de la sucesión a bienes de la *de cujus*, en virtud del fallecimiento del accionante; situación que se realizó tal y como se estableció en auto de **tres de julio de dos mil diecinueve**, al presentar el C. \*\*\*\*\* la copia certificada del instrumento notarial volumen número setecientos cinco, acta número veintinueve mil novecientos nueve, inscrita por la notario supernumerario, adscrita a la notaría número diez de los del Estado, la Licenciada MARÍA DE LA LUZ ACEVEDO REA.

V.- Previa ampliación de demanda que fue presentada por el C. \*\*\*\*\* , en su calidad de albacea en la sucesión a bienes a nombre de \*\*\*\*\* Y/O \*\*\*\*\* (de cujus) y sus respectivas contestaciones; además de haber sido presentado el dictamen de la prueba pericial en grafoscopia, grafometría y caligrafía que fuera ofertada por la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES; por auto de

fecha **nueve** de diciembre de dos mil diecinueve se señaló fecha para la celebración de la audiencia de juicio.

VI.- En la audiencia de juicio que fue celebrada el día de hoy, se desahogaron las pruebas que fueron admitidas a las partes, posteriormente se agotó el periodo de alegatos y se citó el asunto para sentencia definitiva, que se dicta bajo los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

**PRIMERO.-** Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 17, apartado B, párrafo décimo segundo, y 51, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33 A, y 33 F, fracción II, de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 1º, primer párrafo, 2º, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugnan resoluciones administrativas emitidas por autoridades, tanto del Estado como del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, que a dicho del actor le afecta en su esfera jurídica.

**SEGUNDO.-** Precisión del acto impugnado.

Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes<sup>1</sup>, y a fin de fijar con exactitud la cuestión a resolver, se precisa que el acto impugnado en el presente juicio lo es:

La determinación del impuesto a la propiedad raíz para el ejercicio fiscal 2019, relativa a la cuenta catastral

\*\*\*\*\*.

Se arriba a la anterior conclusión, porque si bien el demandante, de manera expresa señala como actos impugnados los señalados en el resultando primero de este fallo; no debe pasarse por

<sup>1</sup> **“ARTICULO 60.-** Las sentencias que dicte la Sala no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:

I.- **La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos**, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;...”

alto lo establecido en el artículo 2º, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes que dispone que el juicio contencioso administrativo procede en contra de resoluciones definitivas, emanadas de las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de los Organismos Descentralizados y otras personas cuando actúen como autoridades. En el entendido que por resolución definitiva debe entenderse aquella que representa la última voluntad de la autoridad administrativa.<sup>2</sup>

Por lo que, si en el caso el demandante combate —además de las citadas resoluciones definitivas— diversos actos en los que dice, se sustenta la determinación del impuesto anteriormente precisado, así como aquellos encomendados a ejecutarla, no obstante, dichos actos no pueden tenerse como impugnados, sino que en todo caso su impugnación se da en la medida de que la parte actora combata los actos definitivos —como sucedió en la especie— por lo que su análisis se realizará en el capítulo correspondiente de los conceptos de nulidad, sin necesidad de tenerlos como actos combatidos con destacada autonomía.

**TERCERO.-** La existencia del acto impugnado se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y 47, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con los documentos que acompañó la parte actora a su demanda, así como con los exhibidos por las autoridades demandadas, probanzas que al provenir de las partes y ser DOCUMENTALES PÚBLICAS emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno para acreditar la existencia de la resolución impugnada.

---

<sup>2</sup> Al efecto véase la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la novena época, con número de registro 184733, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XVII, febrero de 2003 de rubro: **"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."**

Sin que pase por desapercibido que si bien es cierto, por la autoridad demandada Secretaría de Fianzas del Municipio de Jesús, María, Aguascalientes, fue exhibida la determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz respecto de la cuenta catastral \*\*\*\*\*, a nombre de la de cujus \*\*\*\*\* (de cujus); también es cierto que ha quedado acreditado el carácter de albacea con que actúa el ahora actor, respecto del bien inmueble afecto al presente juicio de nulidad.

**CUARTO.** Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, se procede al estudio de las causales de improcedencia invocadas por la SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, previstas en el artículo 26, fracciones I y IV de dicho ordenamiento, ya que de resultar procedente, provocaría el sobreseimiento del presente juicio, impidiendo el análisis de los conceptos de nulidad expresados por el demandante.

La autoridad demandada aduce la falta de interés legítimo del actor, en virtud de que no acredita haber solicitado el avalúo catastral y que se le hubiere negado el mismo; amén de que para la determinación del Impuesto predial no es condición por una parte que el Instituto Catastral hubiere notificado previamente dicho avalúo al interesado y por tanto, no se acredita la afectación en la esfera jurídica del accionante por el hecho de no habersele notificado el avalúo catastral del predio de su propiedad.

Es infundado que para la impugnación del avalúo catastral deba previamente haberse solicitado en todos los casos el mismo conforme al procedimiento administrativo previsto en la ley de Catastro.

Es así, porque en el caso, la accionante impugna el avalúo catastral que sirvió de base para calcular el impuesto a la propiedad raíz, lo que resulta procedente dado que el artículo 31, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, así lo permite en aquellos casos en que el particular demandante afirma desconocer el acto administrativo o resolución impugnada.

Luego, el hecho de que no se le hubiere notificado o de que no lo hubiere solicitado previamente a la presentación de su demanda, tan solo constituye una circunstancia que permite a la contribuyente impugnar en ampliación de demanda el contenido del avalúo catastral —una vez que la demandada en su contestación eventualmente lo hubiere exhibido—; mas no significa que carezca de interés legítimo para controvertir el avalúo catastral dentro del presente juicio al estarse promoviendo la nulidad del Impuesto a la Propiedad Raíz al que le sirvió de base para su cálculo.

Lo anterior aunado a que de los autos se advierte, que los documentos en los que se contiene la resolución administrativa impugnada, se encuentra dirigida a nombre de la parte actora, por lo que es incorrecto que no le asista interés legítimo a la accionante para demandar en juicio la nulidad del acto impugnado, pues es la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes la que le reconoce el carácter de titular del predio que sirve de base para el cálculo de la contribución.

Por tanto, al encontrarse la resolución impugnada expedida a su nombre, la parte actora goza de interés para demandar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal y el avalúo catastral que constituye su antecedente.

Asimismo, invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción I, toda vez que el artículo 4<sup>3</sup> de la Ley de

---

<sup>3</sup> “**ARTÍCULO 4.-** El Impuesto a la Propiedad Raíz, se determinará y pagará por los contribuyentes identificados como sujetos y/o responsables solidarios del impuesto, tomando como base los valores catastrales asignados a los predios de conformidad con lo dispuesto por el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes y lo establecido en el Artículo 31, Fracción IV y 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcciones que se contienen en los Anexos 1 y 3 de la presente Ley, de conformidad con las tasas y cuotas siguientes:



Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes para el ejercicio fiscal de 2019, establecen que como una facilidad administrativa, la autoridad municipal proporcionará un formato oficial a los particulares donde se contenga la determinación de la base del impuesto al valor catastral— así como la cantidad a pagar, una vez aplicada la tasa, por lo que el contribuyente estaba en aptitud de presentar un escrito de inconformidad o en su caso, solicitar

**TIPOS DE INMUEBLES TASA AL M. D. ANUAL**

**A. INMUEBLES URBANOS**

Concepto	Importe
1. Con construcción	1.70
2. Sin construcción	6.61
3. Con construcción de interés social	0.55
4. Sin construcción de interés social	0.66

**B. RÚSTICOS**

Concepto	Importe
1. Con construcción o sin ella	2.83

**C. INMUEBLES EN TRANSICIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO**

Concepto	Importe
1. Ubicados dentro de la mancha urbana	4.05
2. Ubicados fuera de la mancha urbana	3.37

Si al aplicar las tasas anteriores, la cantidad a pagar determinada es inferior a \$227.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), será ésta la que se cobrará anualmente como cuota mínima.

Derivado del proyecto de Modernización Catastral del Estado, los contribuyentes que consideren que la clasificación de la construcción del inmueble por el que pagan Impuesto a la Propiedad Raíz, no es la que corresponde, podrán solicitar una revisión de los valores unitarios de construcción aplicados, para que en su caso, se obtenga una nueva clasificación de la construcción y por ende, una reconsideración de valores conforme a la Tabla de Valores Unitarios de Construcción, misma que se encuentra en el Anexo 2, en la que se incorpora el concepto de estado de conservación “regular”, así como los tipos de construcciones habitacional popular, precaria, histórico y cobertizo, lámina o teja, entre otros, con la finalidad de que, en su caso, se realice el ajuste correspondiente en el pago de este impuesto.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales podrá proporcionar el formato oficial que contenga, la determinación de la base del impuesto y de la cantidad a pagar una vez aplicada la tasa correspondiente.

En el caso de que el contribuyente acepte que los datos contenidos en el formato oficial, concuerden con la situación real del inmueble, pagará el monto del impuesto a su cargo, presentándolo en las oficinas autorizadas y se tendrá conforme con el monto enterado.

En el supuesto de que el contribuyente no esté conforme con la determinación del impuesto, porque detecte que los datos del inmueble no son correctos, debido a que existan diferencias en la superficie de terreno, en las construcciones o en la calificación que a éstos corresponda, podrá manifestarlo por escrito a más tardar el 30 de Abril del año fiscal que corresponda ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para que una vez que se acredite la existencia del error, la dependencia le formule la nueva propuesta de pago, considerando esta información, después de la fecha señalada, ya no se podrá realizar ninguna modificación.

En el caso de que la inconformidad del contribuyente se derive del valor asignado en el Avalúo Catastral expedido por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, deberá proceder en los términos previstos por la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes.

La falta de recepción del formato oficial señalado en el presente Artículo, no exime al contribuyente de la obligación de declarar y pagar el impuesto predial correspondiente. En el supuesto de que no se reciba el formato antes referido, el contribuyente deberá acudir a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, a solicitar la determinación del impuesto y de la cantidad a pagar.

En el pago del Impuesto a la Propiedad Raíz para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, en los lugares autorizados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales se otorgarán los siguientes descuentos:

1. Se reducirá un 15% aplicable en el mes de enero;
2. Se reducirá un 10% aplicable en el mes de febrero; y
3. Se reducirá un 5% aplicable en el mes de marzo.

Para la población que se encuentre dentro de los siguientes grupos, se aplicará el 50% únicamente por el inmueble de su propiedad, siempre y cuando dichas personas sean quienes lo habiten, previa acreditación que para ello se realice. Aplicable durante el primer cuatrimestre del año, a excepción de las personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, a las cuales se les aplicará durante todo el año.

Grupos:

1. Viudos, que así lo acrediten con el acta de matrimonio y de defunción; en este único caso, el descuento podrá concederse si el inmueble fue propiedad del cónyuge y el supérstite tiene ahí establecida su casa habitación.
2. Personas que con pasaporte, credencial de elector o credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acrediten tener una edad igual o mayor de 60 años.
3. Pensionados y jubilados que lo acrediten con documento oficial.
4. Personas con discapacidad que se consideren así en términos de la Ley de Integración Social y Productiva de las personas con Discapacidad.

Este impuesto deberá cubrirse por anualidad, en una sola exhibición en el primer trimestre del año.

En los casos de excedencias o de predios no empadronados de construcciones, reconstrucciones o de ampliaciones no manifestadas, el monto del pago correspondiente a tal impuesto, comprenderá los 5 años

concretamente la emisión del avalúo, por así establecerlo el artículo 21, fracción XV de la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes.

Resulta inexacto que deba decretarse el sobreseimiento pues la parte actora al haber manifestado en su demanda el desconocimiento del procedimiento por el cual se calcula, determina y ejecuta el impuesto a la propiedad raíz, al no haber sido requeridos por la autoridad, se presume que el particular no tuvo conocimiento del formato referido en el citado artículo 4º de la Ley de Ingresos, ya que la entrega de éste, es potestativo para la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, por lo que no necesariamente debe ser entregado a los particulares para que éstos se inconformen en sede administrativa con la determinación de la base de impuesto, esto es, en contra del valor catastral, o bien, soliciten el avalúo catastral ante el Instituto a efecto de verificar si el valor que fuera tomado en cuenta por la autoridad municipal, es el correcto.

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicita la autoridad demandada.

**QUINTO.-** Al no actualizarse la causal de improcedencia interpuesta por la autoridad demandada o que esta Sala advierta alguna de oficio, lo procedente es analizar los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, que son del tenor a que se refiere el escrito de demanda; mismos que no se reproducen en obvio de repeticiones; sin que se haga necesaria su transcripción por no ser un requisito formal de las sentencias.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la novena época sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo VII de abril de 1998, localizada en la página 599, cuyo rubro y texto dicen:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.*** El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a

---

anteriores a la fecha de su manifestación, así como una multa del 5% del valor catastral, que se determine al bien inmueble y sus construcciones.”



*cabo al transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”.*

De igual forma, se tienen por reproducidas, en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, las cuales son del tenor a que se refiere el escrito de contestación; sin que se haga necesario su transcripción, por no ser un requisito formal de las sentencias.

#### SEXTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.

Por ser una cuestión de estudio preferente, se analizan en primer término, los argumentos expresados por la parte actora en el DÉCIMO de los conceptos de nulidad del escrito inicial de demanda en cuanto a la falta de competencia de la autoridad demandada, Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Jesús María, para efectuar la determinación impugnada.

Así, argumenta en esencia que la autoridad es omisa en citar todos y cada uno de los fundamentos normativos que la dotan de facultades de manera adecuada; de igual manera manifiesta que la autoridad pretende fundamentar su competencia sin tomar en consideración el artículo 4° de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes, siendo insuficiente que se fundamente en una ley de manera genérica, sin precisar los artículos que la facultan para determinar y cobrar el impuesto.

Tales argumentos son **infundados**.

Se afirma lo anterior siendo cierto que la autoridad demandada, tal y como lo reconoce la actora, cita en su determinación los artículos 50, 72 y 121, fracciones II, III y VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes—éste último según se advierte del párrafo final expresado en la Determinación del impuesto a la

propiedad raíz número **58-814**—, también lo hace conforme lo dispuesto por el artículo 23 fracciones I, III, VIII, XVII y en el Título Cuarto Capítulo I de la Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, los cuales disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

### **Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes**

*“Artículo 50. La Tesorería Municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento.”*

*“Artículo 72. La Tesorería Municipal, o el nombre que se designe en el Reglamento, es el único órgano de recaudación de los ingresos municipales, así como de las erogaciones que deba hacer el Ayuntamiento.”*

*“Artículo 121. Son atribuciones del Tesorero Municipal:*

*...*

*II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables;*

*...”*

### **Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes**

*“ARTÍCULO 23.- Son facultades de la Dirección de Finanzas del Municipio:*

*(...)*

*VIII. Determinar la cuantía de los créditos fiscales explicando al contribuyente la razón del concepto y su desglose;”*

#### **“TÍTULO CUARTO DE LOS IMPUESTOS CAPÍTULO I Del Impuesto a la Propiedad Raíz**

*(...)*

*ARTÍCULO 155.- La Dirección de Finanzas Municipal tendrá acción real para el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz y de las prestaciones accesorias a éste. En consecuencia, el procedimiento administrativo de ejecución que establece esta Ley, afectará a los inmuebles directamente.*

*(...).”*

Ahora bien contrario a lo que aduce el actor, de la interpretación sistemática de los artículos 50, 72 y 121, fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, invocados por la autoridad municipal en la determinación que ahora se combate para fundar su competencia, se colige que conforme al contenido de la Ley

de Hacienda, la Tesorería Municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento y que dicho órgano tendrá el nombre que se le designe en la normatividad correspondiente, y que además dicho órgano tendrá entre otras atribuciones, la de determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables; por su parte la Ley de Hacienda establece que la Dirección de Finanzas es la autoridad del municipio, encargada de realizar el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz, determinando la cuantía, explicando la razón del concepto y su desglose, luego entonces, se deduce el cargo de Secretario de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, es equiparable o equivalente al del Tesorero Municipal, es así porque que acorde a la naturaleza, definición y acepción de los vocablos Tesorero<sup>4</sup> y Finanzas<sup>5</sup>, se tiene que ambos términos se encuentran vinculados con la custodia, distribución, administración de los caudales o bienes de una dependencia o de la hacienda pública.

Precisado lo anterior, es factible concluir que la determinación que ahora se combate fue emitida por autoridad competente, el Secretario de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes —nombre designado en la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes al Tesorero Municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes—, el cual conforme al artículo 121 del precitado

---

<sup>4</sup> “tesorero

(Del lat. *thesaurarius*).

1. m. y f. Persona encargada de custodiar y distribuir los caudales de una dependencia pública o particular.”

<sup>5</sup> “finanza.

(Del fr. *finance*)...

4. f. pl. Caudales, bienes.

5. f. pl. Hacienda pública.”

ordenamiento jurídico, está facultado para determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones aplicables.

Por tanto, por las razones dadas, la determinación que constituye el acto impugnado en este juicio de nulidad, en la que se determinó y liquidó una contribución relativa al impuesto a la propiedad raíz (predial) respecto de las cuentas predial precisadas en el Segundo Considerando de la presente resolución, se reitera fue emitida por órgano competente.

De ahí lo INFUNDADO del concepto de nulidad en estudio.

Analizado lo anterior, se procede al estudio de los argumentos expresados por la parte actora en el escrito inicial de demanda, en la cual manifestó que desconocía la resolución determinante y el avalúo catastral del crédito fiscal impugnado.

En principio, conviene señalar que en el juicio contencioso administrativo, existe la figura de la **ampliación de demanda**, en aquellos casos en los que el demandante afirma desconocer el acto o resolución, por lo que se requiere a la autoridad demandada por la exhibición de dichas documentales a fin de estar en aptitud de expresar los conceptos de nulidad una vez conocidos los fundamentos y motivos de dicho acto administrativo, tal y como lo establece el artículo 31, párrafo tercero, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que dispone:

*“ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.*

*...  
Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:*

*...  
II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la*

*autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y*

En la especie al formular contestación de demanda, las autoridades demandadas, exhibieron tanto la determinación del impuesto a la propiedad raíz de la cuenta catastral \*\*\*\*\* , como el avalúo catastral de dicha cuenta para el ejercicio fiscal 2019.

En virtud de lo anterior, resulta **FUNDADO** el concepto de nulidad identificado como **NOVENO**, del escrito de ampliación de demanda, del cual se desprende que la parte actora refiere, entre otros argumentos, que los avalúos que acompañó el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes a su contestación no es el que la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio utilizó para las determinación de los créditos fiscales, ya que existe discrepancia entre el valor catastral señalado en esto y los que se tomaron como base para la determinación del Impuesto a la Propiedad Raíz, relativo a las cuentas prediales en mención.

El anterior argumento es **FUNDADO** y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

En efecto, de la contestación a la demanda realizada por las demandadas y los documentos que le acompañaron, particularmente de la determinación del impuesto impugnado (fojas 21 y 22) y el avalúo catastral (foja 30) del expediente, se advierte lo siguiente:

Cuenta catastral	Valor catastral en la determinación	Valor catastral en el avalúo
*****	\$111'378,670.39	\$100'624,219.20

Así, le asiste la razón al demandante, pues para la determinación del impuesto a la propiedad raíz se tomó un valor que no corresponde al señalado en el avalúo catastral y por tanto se

concluye que las demandadas no acompañaron a sus contestaciones el avalúo catastral que sirvió de base para el cálculo de la contribución.

Por tanto, el desconocimiento que adujo tener el actor obligaba a las autoridades demandadas a exhibir la resolución determinante del crédito fiscal impugnado —determinación de impuesto a la propiedad raíz con el avalúo catastral que le sirvió de base— y su constancia de notificación.

Por lo que al ser omisas en adjuntar el avalúo sustento del cálculo del impuesto a la propiedad raíz para el ejercicio fiscal **2019**, referente a la cuenta catastral **\*\*\*\*\***, violaron de igual manera, lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Consecuentemente, *las autoridades demandadas dejaron en estado de indefensión a la parte actora*, toda vez que al **no exhibir el documento** en el que consta el avalúo catastral que sirvió de base para el cálculo de la contribución combatida, así como la **determinación del impuesto a la propiedad raíz**, impidiendo al demandante la posibilidad de combatir tal resolución en ampliación de demanda.

Es decir, la demandada hizo nugatorio el derecho de la parte actora de controvertir los actos que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo; lo cierto es que la omisión de haber exhibido la resolución determinante del impuesto predial y el avalúo catastral por parte de las autoridades demandadas, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que en el fondo las autoridades demandadas carecen de elementos para determinar el crédito fiscal al contribuyente, lo que se traduce en una contravención a las disposiciones aplicables u omisión en la aplicación de las debidas, lo cual constituye una **violación de fondo** que provoca la **nulidad lisa y llana** del acto impugnado.

**SÉPTIMO.-** Al ser **FUNDADOS** los argumentos vertidos por el demandante, en términos de lo analizado en el



considerando que antecede, se concretan las causales de anulación establecidas por el artículo 61, fracción II y III, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, por lo que, con fundamento en el artículo 62, fracción II, de la citada ley, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del crédito fiscal por concepto de impuesto a la Propiedad Raíz (PREDIAL) para el ejercicio fiscal 2019, emitida por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes el *uno de marzo de dos mil diecinueve*, respecto de la cuenta catastral  
\*\*\*\*\*.

Con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, deberá restituirse al actor la cantidad de:

- \$300,702.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.) según el documento denominado “Pago de contribuciones y otros ingresos” con número de folio \*\*\*\*\*, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, a nombre de la parte actora, con sello de pagado de fecha *uno de marzo de dos mil diecinueve*; mismo que obra a foja 3 del expediente.

Mismo que se deja a disposición de la demandada, SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, para que conforme al trámite legal que corresponda, gire instrucciones y/o realice las gestiones necesarias, acompañando de ser necesario del original de dicho documento y en su caso copia certificada de la sentencia dictada por esta Sala, que desde luego, queda autorizada desde este momento, a fin de que se verifique la devolución de su importe a la parte actora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracciones II y III, y 62, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:



**PRIMERO.-** La acción ejercitada por la parte actora es procedente

**SEGUNDO.-** Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del acto impugnado, precisado en el Segundo Considerando de esta sentencia por las razones expuestas en el Considerando Sexto de la misma.

**TERCERO.-** Procédase en ejecución de sentencia a la devolución puntualizada en el último considerando

**CUARTO.-** NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de veinte de enero de dos mil veinte.- Conste.

L'EFM/jjo

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes:

**CERTIFICA:**

Que la presente impresión contenida en dieciséis páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número \*\*\*\* \*\*, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veinte.- Doy fe.

**LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES**  
**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA**  
**ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**